



# UPDATES PHILIPPINES

Publicación del Frente Democrático Nacional de Filipinas

Amsterdamsestraatweg 50, 3513AG Utrecht, Los Países Bajos

T: +31 30 2310431 | E: [updates.philippines@ndfp.org](mailto:updates.philippines@ndfp.org) | W: [updates.ndfp.org](http://updates.ndfp.org)

2021 Numero 8

Edición Español

1 de agosto 2021

## EDITORIAL

### Presidencia Duterte : Choque y quemadura

El presidente Rodrigo Duterte y su séquito de propagandistas aduladores están manipulando al público con la intención de perpetuarse en el poder más allá de las elecciones de mayo de 2022. Según la Constitución de la República de Filipinas, el presidente no puede solicitar la reelección. Pero confíe en Duterte y sus compinches para subvertir la Constitución, imponiendo lo ilegal para que sea legal.

Un plan consiste en que su hija, Sara Duterte-Carpio se presente a la presidencia. De tal palo tal astilla: asesinatos en masa, narcotráfico, corrupción gubernamental y la dinastía Duterte sigue viva. Otro plan es que el propio Duterte se postule para vicepresidente bajo un presidente chiflado, este último dimitiendo después de las elecciones para dar paso al déspota que reclama “legalmente” la presidencia. Se puede suponer que se están cocinando planes aún más sucios, los secuaces seguramente tendrán argumentos listos para justificar su “legalidad”.

Pero realmente ahora: ¿quién desea una segunda presidencia de Du-dirty (Du-sucio)? Me vienen a la mente Xi Jin Ping, Putin y Joe Biden. Los amos imperialistas necesitan a su déspota sin escrúpulos para mantener a Filipinas bajo su control. Los altos funcionarios militares y policiales con charcos de sangre en las manos también necesitan a Du-dirty para evitar el enjuiciamiento por sus atroces crímenes.

¡El pueblo filipino ciertamente aborrecerá una segunda presidencia de Duterte! Este régimen sólo ha traído muerte, represión, empeoramiento del desempleo, agravamiento de la pobreza, corrupción desenfadada y traición nacional descarada.

Ha fracasado por completo en controlar la propagación de Covid-19 y, en cambio, ha exacerbado la represión policial y la corrupción del gobierno. El desempleo, el subempleo y la incidencia de la pobreza aumentaron en los últimos cinco años, y las proyecciones ya empeoraron incluso antes de que comenzara la pandemia a principios de 2020.

Más de 30.000 filipinos, en su mayoría pobres, han sido asesinados en medio de la fingida «guerra contra las drogas». Y, sin embargo, según los propios cálculos de la policía, el problema de las drogas ha empeorado aún más! ¿Qué pasa con la corrupción del gobierno? No es necesario que el senador Manny Pacquiao le diga que la guerra fingida de Duterte contra la corrupción es un fracaso total. Los rangos inferiores del gobierno continúan pellizcando sobras, sus compinches más cercanos roban millones de pesos, mientras que el propio Du-dirty se queda con los miles de millones de pesos.

La guerra del régimen contra los moros y los pueblos indígenas y la guerra total contra el movimiento revolucionario han dado lugar a centenares de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones ilegales, ocupación militar de pueblos y saqueo de los recursos naturales de la nación. Sin embargo, después de cinco años, el movimiento revolucionario logró fortalecerse e incluso expandirse más, impulsado por la resistencia de los pueblos contra el régimen asesino.

Después de cinco años atroces, el pueblo filipino espera con ansias el colapso del régimen de Duterte. Duterte y sus secuaces más cercanos procesados por sus atroces crímenes serán justicia largamente esperada. **UP**



*La Ley del Terror es la nueva Ley Marcial.  
Foto: Save our Schools*

### La etiqueta “terrorista” supone una escalada del terrorismo de Estado - NDFP

El Consejo Nacional del Frente Democrático Nacional de Filipinas denunció el 21 de julio al gobierno de Duterte por su designación del NDFP como “organización terrorista”, diciendo que esto señala la escalada del terrorismo de Estado contra el NDFP y sus 18 organizaciones aliadas. Dijo que la etiqueta “terrorista” también verá una “escalada de ataques contra los activistas sociales legales, los defensores de los

[continúa página siguiente...]

[... continuación]

derechos humanos, los críticos y los opositores” que serán etiquetados arbitrariamente como miembros y asociados del NDFP.

El NDFP afirmó: “Somos una fuerza cobeligerante en la guerra civil con el Gobierno de la República de Filipinas, y tenemos el estatus de beligerancia de acuerdo con el derecho internacional... Es completamente mendaz y malicioso calificar al NDFP como una organización ‘terrorista’”.

El consultor político jefe del NDFP, el profesor José María Sison, añadió que “la designación está en guerra con los principios básicos del derecho internacional humanitario sobre el estatus, los derechos y el carácter legítimos de los movimientos de liberación nacional”. Dijo que la designación de “terrorista” tiene la clara intención de “acosar, silenciar, detener o incluso matar a los consultores del NDFP y a las personas que participan en las negociaciones de paz entre el GRP y el NDFP, e incluso a los defensores de la paz, los críticos y los opositores”.

El profesor Sison advirtió que Duterte pretende amañar las elecciones de 2022 para mantenerse en el poder y evitar su detención por la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad.

El Consejo Antiterrorista del gobierno de Duterte firmó una resolución el 23 de junio de 2021 en la que declaraba al NDFP como “organización terrorista”. El ATC hizo pública la resolución el 19 de julio. La resolución afirmaba que “el NDF es el núcleo y el grupo más consolidado que proporciona apoyo a la expansión armada y organizativa del Partido Comunista de Filipinas / Nuevo Ejército del Pueblo”.

El Consejo contra el Blanqueo de Capitales anunció poco después que comenzaría a congelar las cuentas financieras relacionadas con el NDFP.

La Sra. Julieta de Lima, presidenta interina del Panel de Negociación del NDFP, calificó la designación como un “clavo innecesario en el ataúd de las negociaciones de paz entre el GRP y el NDFP”. Calificó la designación como un acto anti-paz y dijo que “es un gran desperdicio que Duterte tire por la borda todo lo que se ha logrado en las prolongadas y arduas negociaciones de paz”. Señaló los logros de ambas partes en las partes más importantes del Acuerdo General sobre Reformas Sociales y Económicas.

La versión del NDFP del CASER, subrayó, “es una prueba clara y brillante contra las acusaciones de los verdaderos terroristas, Duterte y los suyos”.

A pesar de la etiqueta de “terrorista”, el Consejo Nacional del NDFP dijo que mantendrá su panel de paz, “con la esperanza de que el régimen de Duterte sea finalmente expulsado del poder y que una administración posterior a Duterte esté dispuesta a reanudar las negociaciones de paz para una paz justa y duradera”. **UP**



## El gobierno envaletona a las fuerzas de seguridad para que masacren a los pobres - Investigate PH

La Comisión Internacional Independiente para la Investigación de las Violaciones de Derechos Humanos en Filipinas (Investigate PH, por sus siglas en Inglés) publicó su [Segundo Informe el 6 de Julio de 2021](#), revelando que las políticas del gobierno de Rodrigo Duterte “Han envaletonado tanto a la policía como al ejército para que masacren a los pobres y marginados”, así como a aquellos que defienden los derechos de estas comunidades. El

Informe resalta la “prevalente falta de remedios domésticos eficaces” contra estos crímenes patrocinados por el estado.

De acuerdo con Ms. Suzanne Adely, Alto Comisionado de Investigate PH y Co-Presidenta del Comité Internacional del Gremio de Abogados de los EEUU, la Orden Ejecutiva 70 de Duterte, o “Programa de Contrainsurgencia de toda la Nación” y el Acta Antiterrorista de 2020 son ejemplos principales de políticas que animan a las fuerzas de seguridad de Duterte a asesinar a ciudadanos filipinos pobres.

Investigate PH, [compuesta por 17 eminentes personas del ámbito de la defensa de los derechos humanos](#), resalta en su Segundo Informe tres aspectos del “Estado de Terror en Filipinas”: la guerra contra la disidencia, la guerra contra el pueblo Moro y la guerra contra los pobres, bajo el disfraz de “Guerra contra la droga”.

Resalta también la falta de compensación por los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno y la “rutina de encubrimiento” llevada a cabo por la Policía Nacional Filipina. La policía y los soldados, afirma, están ejecutando a disidentes políticos “de manera similar a las operaciones antidroga”. Esta “represión institucionalizada” daña a la sociedad civil, desde a presuntos comunistas a iglesias e instituciones democráticas de larga tradición.

El informe enfatiza también que la “Guerra contra el Terror” respaldada por operaciones militares de

[continúa página siguiente...]

[... continuación]

los EEUU en Mindanao “ha fallado a la hora de distinguir entre civiles y combatientes”, y ha causado el desplazamiento masivo de comunidades Moro. Las políticas del gobierno de Duterte, afirma, “menoscaban el derecho a la autodeterminación de las comunidades Moro” y son negligentes con las necesidades de las comunidades desplazadas.

La Alta Comisionada Rev. Dr. Susan Henry-Crowe, de la Iglesia Metodista de los EEUU, dijo que “Es difícil escuchar testimonios sobre que la asistencia militar de los US es cómplice de violaciones de derechos humanos. Es simplemente inaceptable”.

Investigate PH hizo un llamamiento al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y a los estados soberanos a exigir responsabilidad al gobierno de Duterte por las decenas de miles de asesinatos extrajudiciales, arrestos y detenciones ilegales y otras formas de violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Oficiales del gobierno de Duterte, dicen, deberían ser también responsabilizados de estas violaciones.

Llamaron también a la protección permanente de todos los testigos, defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de la academia y el ejercicio de deberes pastorales de los ministros religiosos.

Investigate PH prevé publicar su Informe Final en Septiembre de 2021. El Primer Informe fue publicado en Marzo de 2021.

Paralelamente, el Congreso Internacional de Sindicatos (ITUC, por sus siglas en inglés) publicó su Índice de Derechos Globales 2021 citando Filipinas en el Top 10 de peores países del mundo para los trabajadores. De acuerdo con el informe, ha habido demasiadas desapariciones y asesinatos de líderes y miembros sindicales, sancionados por el Presidente Duterte en sus discursos. ITUC resaltó que 28 representantes laborales han sido ilegalmente detenidos, mientras que siete fueron asesinados tan solo en el pasado año.

Confirmando las averiguaciones de ITUC, Elmer Labog, presidente de la central sindical Kilusang Mayo Uno, afirmó que “los trabajadores y líderes sindicales continúan siendo víctimas de asesinatos, señalamiento, seguimiento y arrestos por parte de las autoridades”. **UP**

## El PCCh de Xi Jinping es un gran matón imperialista - CPP

El Partido Comunista de Filipinas arremetió el 5 de julio contra el presidente Xi Jinping y el Partido Comunista de China como “un gran matón imperialista” por impulsar su ‘Iniciativa del Cinturón y la Ruta’ para descargar el capital excedente de China, obligando a otras naciones a renunciar a su soberanía y patrimonio a través de presiones financieras y económicas, y utilizando su vasta fuerza armada para acosar a los pescadores filipinos y ocupar territorios filipinos en el Mar de Filipinas Occidental.

El Jefe de Información del PCF, Marco Valbuena, comentó el discurso pronunciado por Xi Jinping el 1 de julio para conmemorar el Centenario del PCCh, lamentando cómo “el otrora grande, glorioso y con la línea correcta PCCh ha degenerado de un partido de la clase obrera a un partido gobernado por los revisionistas modernos y la burguesía; de un partido del socialismo a un partido del capitalismo; de un partido de la revolución a un partido de la reacción”.

Valbuena dijo que en el discurso de 15 páginas no se mencionó ni una sola vez la palabra ‘proletariado’, lo que indica que el “PCCh ha perdido su militancia de clase y su espíritu revolucionario”, y que Xi Jinping “se hace eco del populismo burgués de Kruschov y su ‘partido y estado de todo el pueblo’ para enmascarar su traición al socialismo y a la causa proletaria”.

El PCF criticó a Xi Jinping por evitar la palabra “socialismo”, insistiendo en cambio en el “rejuvenecimiento nacional”. “Esto no tiene ningún significado para el proletariado chino y las masas trabajadoras que son explotadas por la burguesía monopolista del Estado y los grandes capitalistas para acumular grandes cantidades de riqueza”, dijo Valbuena.

Valbuena, reaccionando a la descripción de Xi Jinping de China como “moderadamente próspera”, dijo que esto oscurece la profunda división económica y de clase entre los que gobiernan el Estado y las grandes corporaciones, por un lado, y los trabajadores que trabajan en condiciones opresivas y los pequeños agricultores que fueron desplazados de sus tierras.

“‘Moderadamente próspero’ es lo que se obtiene”, afirma Valbuena, “cuando se hace una media entre la riqueza de los 626 multimillonarios de China, con un valor de 2,531 billones de dólares, y la riqueza que poseen cientos de millones de trabajadores y campesinos, que prácticamente no asciende a nada, y las posesiones de unas pocas decenas de millones que se esfuerzan por mantenerse en el medio”.

El PCF llamó a los revolucionarios proletarios en China a “mantenerse fieles al marxismo-leninismo-maoísmo... ponerse de pie y exponer todas las mentiras populistas burguesas de Xi Jinping y los capitalistas monopolistas chinos y dejarle claro al mundo entero los males que la restauración capitalista en China ha provocado en el pueblo chino.”

“Deben restablecer un auténtico partido comunista en China y recuperar la bandera roja de las manos de los revisionistas modernos para que estos expongan sus verdaderos colores.” **UP**